

# España, ¿en el lado correcto de la historia?

Ni eslóganes ni relatos pueden sustituir los deberes que acarrea el ejercicio del poder. Son los hechos los que interpelan a la calidad moral de la acción de gobierno

En el debate público contemporáneo se ha generalizado el uso de la expresión ‘estar en el lado correcto de la historia’ como un recurso retórico destinado a conferir legitimidad moral a determinadas posiciones políticas. Sin embargo, esta formulación, cuando se emplea de manera acrítica, tiende a simplificar en exceso fenómenos complejos y a sustituir el análisis por la consigna. La historia, entendida como proceso de evaluación a largo plazo, no se rige por declaraciones de intención, sino por la coherencia entre principios normativos y resultados empíricos.

En este sentido, resulta problemático identificar ese supuesto ‘lado correcto’ con una adscripción ideológica concreta o con la mera oposición discursiva a determinados conflictos. Como ya advirtió Baltasar Gracián, «las cosas no pasan por lo que son, sino por lo que parecen», lo que introduce una distinción fundamental entre apariencia y realidad que sigue siendo plenamente vigente. Aplicado al ámbito político, ello obliga a examinar no solo los discursos, sino también las prácticas efectivas de los gobiernos.

Desde una perspectiva normativa, el criterio para evaluar la posición de España en ese eje histórico debe apoyarse en elementos ampliamente consensuados en la teoría política contemporánea: la vigencia del Estado de derecho, la efectiva separación de poderes, la independencia judicial, la protección de las libertades civiles, en particular la libertad de expresión, y la existencia de mecanismos de rendición de cuentas. Estos factores constituyen la base institucional de las democracias avanzadas y su deterioro no es una cuestión técnica, sino una quiebra moral.

A esta dimensión institucional se añade una variable económica que no puede ser ignorada. La evidencia comparada muestra que las sociedades que alcanzan mayores niveles de bienestar son aquellas que combinan economías de mercado dinámicas con sistemas de redistribución eficaces. La generación de riqueza no es un lujo ideológico,



HERALDO

sino una obligación política. Gobernar sin crear prosperidad, o peor aún, deteriorando las condiciones para generarla, es una forma de irresponsabilidad que termina castigando a los más vulnerables.

En este contexto, resulta especialmente grave constatar tendencias que no admiten maquillaje retórico: aumento de la pobreza infantil, alejamiento de la renta per cápita respecto a la media europea y señales persistentes de debilitamiento en la separación de poderes.

No se trata de discrepancias ideológicas, sino de hechos que

interpelan directamente a la calidad moral de la acción de gobierno. Porque tolerar estos retrocesos mientras se proclaman principios elevados no es solo incoherente; es profundamente deshonesto.

Como también advirtió Baltasar Gracián, «un grano de audacia en todo es importante cordura». Pero la audacia mal entendida, la que desprecia límites, tensiona instituciones y confunde mayoría con impunidad, no es virtud, sino imprudencia. Cuando el poder deja de autocontenerse, cuando sustituye el respeto por la conveniencia, se abre la puerta a una degradación que nunca es inmediata, pero siempre es acumulativa.

El problema de fondo es que el eslogan ha sustituido al deber. Se invoca la justicia mientras se de-

bilitan las reglas que la hacen posible; se proclama la igualdad mientras se tolera el deterioro de las condiciones materiales de amplios sectores de la sociedad; se apela a la democracia mientras se erosionan sus contrapesos. Esta disonancia no es menor: es la antesala de una política sin responsabilidad.

España no se aleja del lado correcto de la historia por lo que dice, sino por lo que consiente. Se aleja cada vez que relativiza la separación de poderes, cada vez que trivializa la corrupción o la instrumentaliza según convenga, cada vez que sacrifica el interés general en favor de la supervivencia política. Y, sobre todo, se aleja cuando convierte la moral pública en un ejercicio de propaganda.

Estar en el lado correcto de la historia no es una cuestión de relato, sino de rectitud. Exige integridad en el ejercicio del poder, respeto escrupuloso por la ley y compromiso real con la prosperidad compartida. Exige asumir que gobernar es servir, no perpetuarse; construir, no erosionar; rendir cuentas, no eludirlas.

Porque la historia no es un tribunal simbólico al que se apela en discursos, sino un juicio implacable sobre las consecuencias de los actos. Y en ese juicio no bastan las palabras ni las intenciones: cuentan las decisiones, los resultados y la huella que dejan en la vida de los ciudadanos. Si España quiere estar en el lado correcto de la historia, no puede limitarse a proclamarlo. Tiene que merecerlo.

José Miguel Sánchez Muñoz es director general de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza

«España no se aleja del lado correcto de la historia por lo que dice, sino por lo que consiente»